

IMPACTO DEL CONTROL SOCIAL COMO MECANISMO DE CONTROL FRENTE A LA INVERSIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO D.T.C.H. DE SANTA MARTA

ADRIANA CAROLINA HENAO VELA
JUAN CARLOS MONTERO DE LA HOZ
MAYRA ALEJANDRA VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ
ANA MARSELA VEGA CHACÓN

RESUMEN

El presente artículo muestra una recopilación de datos sobre el “Impacto del Control Social como mecanismo de control frente a la Inversión Social en el Distrito de Santa Marta”, partiendo del desarrollo de ideas conceptuales encaminadas a establecer la veracidad de las mismas de manera crítica, aportando un punto de vista personal y datos claves a investigaciones futuras.

Lo investigado se enmarca dentro del ámbito público, delimitándolo a la ciudad de Santa Marta y su ejercicio social en las Inversiones Sociales competentes y del buen manejo del bien o servicio prestado.

Adriana Carolina Henao Vela, Estudiante Contaduría Pública de la Universidad del Magdalena
Juan Carlos Montero De La Hoz, Estudiante Contaduría Pública de la Universidad del Magdalena
Mayra Velásquez Fernández, Estudiante Contaduría Pública de la Universidad del Magdalena
Ana Marsela Vega Chacón, Estudiante Contaduría Pública de la Universidad del Magdalena

PALABRAS CLAVES

Control Social, Inversión Social, Gestión Pública, Participación Ciudadana.

ABSTRACT

This paper presents a compilation of data on the "Impact of Social Control as a control mechanism against Social Investment in the District of Santa Marta", based on the development of conceptual ideas aimed to establish the veracity of them critically, providing a personal perspective and key data for future research.

The investigation is part of the public sphere delimiting the city of Santa Marta and its financial year in Social Investments competent and good management of the good or service provided.

KEYWORDS

Social Control, Social Investment, Public Management, Public Participation.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo político de nuestro país, en el marco de un sistema democrático, conlleva necesariamente la concesión de un conjunto de derechos ciudadanos, tanto civiles, como políticos, económicos, sociales, culturales y de solidaridad.

Sin embargo, el acceso homogéneo y total de la población colombiana a los derechos ciudadanos ha sido un proceso tardío y condicionado, no solo por el desarrollo universal de los sistemas de derecho, sino también por las incongruencias e inconsistencias del sistema político colombiano, aunque desde el periodo colonial ya se hubieran llevado a cabo diversos movimientos sociales para garantizar el derecho civil de la participación.

Aproximadamente hasta mitad del siglo XX la intervención ciudadana en los temas del Estado sólo encontraba cabida, a nivel político y social, en las diferentes expresiones populares asociadas con las formas directas y no institucionalizadas de participación, como lo son las marchas populares, los paros cívicos, las huelgas, las tomas de oficinas públicas, las manifestaciones estudiantiles, y las invasiones de predios privados, entre otras ya que la Constitución del 86 se caracterizaba por ser un estado representativo pero no participativo, por ello la Constitución del 91, en el cual se parte del acuerdo social, modifica esta falencia y establece que Colombia es un Estado Social de derecho pluralista y participativo, dejando en cada artículo sus anhelos de lograr que la participación ciudadana se dé en todas sus formas.

Es así, como a pesar de que la participación ciudadana en los asuntos públicos fue un derecho otorgado en 1948 a las diversas sociedades del mundo por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (principal instrumento internacional donde se salvaguardan los derechos civiles y políticos, además de otros derechos fundamentales), en algunos países como Colombia el interés social por la democracia y la participación activa en las decisiones de la vida política y económica del país ha sido un proceso que comenzó a construirse en la

asamblea Nacional Constituyente que parte de la séptima papeleta a partir de un periodo de reforma Constitucional.

No obstante, y sorteando estas vicisitudes, es decir, aunque la intervención ciudadana en el ámbito público se considere como una institución naciente en Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente al entregar a los colombianos, a través de la Carta Constitucional de 1991, un magno y efectivo conjunto de mecanismos que los habilita para intervenir en los asuntos del Estado, ha logrado hacer de la participación ciudadana una tendencia cada vez más demandada por la sociedad.

Si bien el voto, el plebiscito, el referendo (regular, derogatorio, y aprobatorio), la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular, y la revocatoria al mandato han sido mecanismos, que por su eficacia y eficiencia para garantizar la inclusión activa de la sociedad en los asuntos del Estado se han configurado como los más reconocidos, la legislación colombiana se encargó de igual manera de ampliar diversos espacios y modalidades para la participación de los colombianos en procesos donde se avanza involucrando tanto a la población como a los organismos públicos.

Así, uno de los espacios de participación ciudadana en el manejo de lo público que se ha enmarcado dentro de esta lógica de acción ha sido lo que se conoce como el control social. Desde una descripción básica, el control social se ha conformado como una forma de participación ciudadana que permite a los individuos de la sociedad colombiana, y las organizaciones que hacen parte de la misma, influir en las condiciones de modo, tiempo, y lugar de cómo se desarrolla la gestión pública .

Partiendo de la base de que el control social puede llevarse a cabo en diversos ámbitos y niveles de la administración pública, y que inmersamente en el proceso de evolución que ha sufrido el Estado se ha propiciado la búsqueda de una paulatina modernización de la administración pública, el acercamiento del

ciudadano al servicio del Estado, y pugnar acérrimamente la corrupción que agobia al país, el control fiscal se ha conformado como uno de los espacios del control social en el cual la ciudadanía colombiana ha podido intervenir en el ejercicio de la vigilancia de los recursos del Estado.

ACERCA DEL CONTROL

Empezamos definiendo el control, que es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización si no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos.

De igual forma, el concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico.

Chiavenato, (2.011) afirmó que “El control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente regulador”.

Entonces, Podemos definir el control como “un proceso administrativo a través del cual los administradores realizan un esfuerzo sistemático orientado a comparar el rendimiento con los estándares establecidos por las organizaciones, y estar en capacidad de determinar si el desempeño es acorde con las normas”. Este proceso incluye, obviamente, asegurarse de que todos los recursos estén siendo utilizados de la manera más efectiva posible siempre en función del logro de los objetivos que la organización ha propuesto.

Según Fayol, (1.921) “El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con lo adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente”.

La palabra control tiene muchas connotaciones y su significado depende del área en que se aplique; puede ser entendida como:

- Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para garantizar razonablemente que los objetivos del negocio serán alcanzados y que eventos no deseables serán prevenidos o detectados y corregidos.
- La función administrativa que hace parte del proceso administrativo, junto con la planeación, organización y dirección y lo que la precede.
- Como la función restrictiva de un sistema para mantener a los participantes dentro de los patrones deseados y evitar cualquier desvío. Es el caso del control de frecuencia y expediente del personal para evitar posibles abusos.

Generalmente hablando, controlar es influir en lo que sucede con el fin de obtener el resultado deseado. Existen varios conceptos de control. Algunos interpretan el control como algo que se reduce a verificar. Otros amplían el significado para incluir aspectos preliminares (planificación, programación) como una parte del control. Finalmente, otros juzgan el control y la dirección como sinónimos, lo que implica dinamizarlo y enmarcarlo como una función del proceso administrativo de la organización. Aun no se comprende a cabalidad la importancia de contar con un eficaz y eficiente sistema de control. Incluso en algunos casos se considera al control como una parte independiente del proceso administrativo, cuando en realidad aquel participa concurrente y permanentemente amalgamado en cada una de las etapas de planeación, organización, dirección y el propio control de una entidad.

Esencialmente, controlar implica la medición y la corrección de las actividades de los subordinados para asegurarse de que se están llevando a cabo los planes para alcanzar los objetivos fijados por la alta gerencia.

ACERCA DE LO SOCIAL

Como definición dogmática, Social: Relativo a la sociedad humana o a las relaciones entre unas y otras clases; colectivo que conlleva beneficio para toda la sociedad o para un grupo determinado de ella; relativo a las actividades que se practican en sociedad.

De acuerdo a esto, entendemos que la participación activa y conjunta de la sociedad en los procesos de control, llevados con el fin de crear un beneficio hacia estos mismos, sugieren mayor compromiso del dador para entregar un producto que satisfaga las necesidades del final beneficiario, puesto que si dicha participación la hacen de forma eficiente y de la mano con el responsable, los objetivos fijados cumplirían las expectativas generales.

CONTROL SOCIAL

Definimos al Control Social como una actividad que busca la vinculación directa de la ciudadanía con el ejercicio público, esto con el fin de servir como interlocución necesaria para garantizar una gestión efectiva. El artículo 2 de la Constitución establece que entre los fines esenciales del Estado está “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.

De esta manera, el espíritu del Control Social se traduce en el ejercicio consciente, permanente y juicioso de ciudadanos y ciudadanas que se comprometen con el propósito de hacer seguimiento a la actividad del Estado con el fin de que sus instituciones cumplan su sagrada misión. De igual forma, es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. Aunque a veces se realiza por medios coactivos o violentos, el Control Social también incluye formas no específicamente coactivas, como los prejuicios, los valores y las creencias.

Según la Contraloría Distrital de Santa Marta “El Control Social es el deber y el derecho que tenemos los ciudadanos para vigilar los recursos y bienes públicos. Sirve para orientar y rectificar las decisiones, la administración de recursos, el tiempo y lugar de la realización de servicios y programas, que contribuyen al logro de los fines esenciales del Estado”. Esta promueve veedurías ciudadanas y su integración al Control Fiscal que realiza la entidad, en programas y proyectos de interés general. Estos comités hacen seguimiento a los planes de desarrollo y de mejoramiento de los entes que manejan recursos públicos y orientan a esta Contraloría en la realización de Auditorías.

En este Control Social intervienen:

1. Ciudadanos y ciudadanas de manera individual;
2. Comunidades, organizaciones no gubernamentales (ONG), cámaras de comercio, universidades y asociaciones gremiales que, por su iniciativa, llevan a cabo veedurías ciudadanas u otras formas inéditas e informales de control social a la administración pública;
3. Órganos o instancias institucionalizadas o formalizadas de participación ciudadana de tipo territorial, sectorial y exclusivo de control social, convocados por el Estado;
4. Usuarios de servicios públicos domiciliarios y de servicios de salud; y
5. Medios de comunicación.

Como es ejercido el Control Social:

Las experiencias de control social a la administración pública en el país muestran sus amplias posibilidades, tanto en términos de sus alcances u objetivos, como de los ámbitos, materias, entidades y funcionarios objeto del control social.

Los propósitos u objetivos del control social en Colombia abarcan una amplitud de aspectos y ámbitos que van desde la prevención a la acusación y sanción. Algunas de las formas para lograr los propósitos son los siguientes:

- Hacer visible y difundir al público información oficial.
- Recomendar medidas para hacer más transparentes la información, las reglas de actuación y/o la toma de decisiones.
- Denunciar o demandar judicial, disciplinaria o fiscalmente, con fines de corrección y/o de sanción.
- Criticar con fines de corrección o de sanción social.
- Hacer seguimiento para verificar cumplimiento de actividades con fines de prevención, corrección o información al público.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos y metas de las autoridades, con fines de debate, crítica o corrección.

Además de esto, la ampliación de espacios y modalidades para la participación de los colombianos es un proceso que avanza involucrando tanto a la población como a los organismos públicos. Uno de estos espacios de participación ciudadana en el manejo de lo público es el de Control Social a la Gestión.

El Control Social propone la participación inmediata de la sociedad en el control del Estado, como una forma de participación directa que complementa la democracia representativa. El Control Social va más allá de la fiscalización de los actos y resultados de la administración porque está presente en las diversas posibilidades de la participación social, desde la formulación hasta la aplicación de las políticas públicas.

Por mandato constitucional, los colombianos tienen el derecho de controlar y evaluar la gestión pública, es decir, de juzgar y de valorar si lo realizado por la administración corresponde a lo programado y responde a las necesidades y derechos de las personas. Al controlar la gestión se valora lo que hace la alcaldía,

el puesto de salud, el hospital, el ministerio, la secretaría de educación, el Bienestar Familiar y el Seguro Social, entre otros organismos.

De la misma forma, el Control Social es una forma de participación ciudadana que permite a los individuos y a las organizaciones de la sociedad influir en las condiciones de modo, tiempo y lugar como se desarrolla la gestión pública. Es decir, orientar, corregir, rectificar las decisiones, la administración y manejo de recursos, el tiempo y lugar de realización de servicios y programas del Estado, todo ello con el fin de contribuir al logro de los objetivos propuestos, la eficiente y transparente utilización de recursos, la prestación equitativa de los servicios y el cumplimiento de los fines sociales del Estado. Este Control Social a la gestión pública se realiza a través de observaciones, sugerencias y, llegado el caso, mediante denuncias.

Adecuadamente ejercido, el Control Social debe ser propositivo y proactivo, con el fin de contribuir a mejorar dos aspectos: la forma en que la administración pública suministra bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades ciudadanas, y la apropiación y uso que de ellos tiene la ciudadanía.

Según la Contraloría de Cundinamarca, “La gestión en la administración pública mejora cuando es participativa. Esto significa que la administración conoce, estudia y responde a las razones de la ciudadanía al presentar proyectos, observaciones, sugerencias, peticiones, demandas y denuncias sobre algunos aspectos de la gestión. Mejora cuando es pertinente y corresponde a las necesidades de las comunidades; cuando es eficiente, porque cumple las metas de sus proyectos, invirtiendo los recursos asignados en el plazo previsto; cuando es oportuna por ocurrir en el momento adecuado; cuando es transparente y comprensible para la gente y cuando se ajusta a las normas que la regulan”.

No obstante, el comportamiento ciudadano frente a la gestión de lo público mejora cuando el uso que hacen los ciudadanos de los bienes y servicios corresponde al

propósito para el que fueron dados, cuando conoce lo que ella hace y cuando se dirige a ella haciendo adecuado uso de los instrumentos y herramientas que brinda la ley. Estos deben ejercer el control social atendiendo unas mínimas características, con el propósito de incidir en la gestión de lo público:

“Responsabilidad, para asumir las consecuencias positivas y negativas de las acciones que se adelanten; Solidaridad, en representación de las comunidades destinatarias de la gestión; Conocimiento, solicitando con precisión lo que se requiere, promoviendo que la administración entregue la información de forma clara, suficiente y oportuna y haciendo una revisión seria de ella; Actitud respetuosa, asumiendo que a través del Control Social los ciudadanos son colaboradores de la administración; Oportunidad, buscando un impacto preventivo de su acción informando en el momento adecuado; Propuesta, orientando a la administración sobre lo que quiere la comunidad y el porqué; Argumentos y razones objetivas que les permitan explicar a la administración lo que observan de su gestión; Realismo, para entender las posibilidades reales de la administración para ejecutar cabalmente su gestión. Para saber que pedir, que esperar y de cual instancia de la administración”. (Participación en el control social a la gestión pública ESAP, 2006, p. 14, 24, 25, 26, 30, 31)

En todo caso, el control que realicen los ciudadanos no debe ser únicamente de evaluación sobre lo que ya se hizo. Si bien un problema o dificultad puede ser motivo de Control Social, este es el punto de partida para iniciar un proceso organizado orientado a garantizar que se cumplan sus fines sociales con calidad y equidad, a través de evaluaciones que mejoren en el futuro lo que se quiere.

Para que este Control Social se realice de forma efectiva, existen mecanismos de Participación desarrollados por los entes territoriales:

1. Convocatorias de Control Social: Realizar las convocatorias de control social en el Distrito, con el fin de concretar un espacio de

participación ciudadana, donde las organizaciones Civiles que hacen parte de la misma, puedan expresar su opinión, formular quejas y denuncias, y en general informarse acerca de la gestión pública de los sujetos de control, en el manejo de los recursos del Estado por parte de la Alcaldía de Santa Marta.

2. Promoción y Capacitación de Veedurías Ciudadanas: Capacitar a la Comunidad para constituir o fortalecer las veedurías ciudadanas del Distrito, a través de la participación Ciudadana, para que la comunidad se convierta en veedora de la gestión fiscal y genere vínculos más estrechos con los entes de control, en veedurías de tipo provincial y en las Ciudades donde por su magnitud de población sea indispensable promover las veedurías Ciudadanas, de acuerdo a los requerimientos de la Comunidad y las Autoridades competentes.
3. Integración Interinstitucional para el Control Efectivo: Invitar a participar en las Convocatorias de Control Social a los demás organismos de Control a los Servidores públicos responsables de la gestión, para que observen y puedan mejorar su gestión en forma directa tomando los correctivos y concertando con la Comunidad sus acciones para mejorar y aplicar planes que permitan una toma de decisiones acertada para que los recursos fiscales den un impacto positivo y el control social se aplique en todas sus formas, en temas relacionados con el control fiscal.
4. Promoción de Control Social: Promover la red de control social en el Distrito, articulación de las veedurías a fin de constituir una red que potencialice un control social y fiscal sobre los recursos públicos, en coordinación con los demás organismos de control que tienen competencia en el Distrito.
5. Rendición de Cuentas y Modernización Institucional: Presentar la rendición de cuentas para evaluar los logros obtenidos durante el

desarrollo de los periodos de la Contraloría de Cundinamarca, en forma clara y entendible, para que los ciudadanos se informen y se logre el cumplimiento de calidad y el empoderamiento de la institución. Como resultado de la evaluación que se realice, y teniendo en cuenta las amenazas y debilidades de la Contraloría de Cundinamarca, coadyudar en la presentación de pre proyectos que actualicen a las Contralorías Territoriales y se busque la financiación misional, para cumplimiento de su competencia.

De esta manera, entendemos que el Control Social es pieza clave para el buen desarrollo de Planes, Programas y Proyectos desarrollados por las entidades territoriales. La eficiente elaboración y la entrega de un bien o servicio eficaz, depende en gran parte de la colaboración de la comunidad en general, quien es en última instancia el principal beneficiario.

INVERSIÓN

Inversión es un término económico, con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la ubicación de capital, y la postergación del consumo. El término aparece en gestión empresarial, finanzas y en macroeconomía.

Massé, (1.963) afirmó “En el contexto empresarial, la inversión es el acto mediante el cual se invierten ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio, con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto, a cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo”.

Además de esto, vemos que la actividad económica es hoy esencialmente un fenómeno social, se realiza en y a través de la sociedad. Sabemos que existen muchos factores que determinan el ahorro de cada individuo, así como también

existen otros factores que determinan la parte del ingreso que se utiliza para adquirir bienes, esperando recibir algo de ellos a corto, mediano, o largo plazo; esto es lo que conocemos como inversión.

INVERSION SOCIAL

La Inversión Social es una inversión voluntaria y estratégica de recursos, realizada por individuos, empresas o familias con el fin de promover el desarrollo y la transformación positiva de la sociedad.

La Inversión Social focaliza todos sus esfuerzos en la lucha y la superación de las causas generadoras de pobreza, exclusión y desigualdad, a través de iniciativas innovadoras, orientadas al resultado, maximizando el impacto de sus acciones. Para mayor claridad, la inversión social no busca apoyar intenciones, se concentra en la generación de resultados.

La Red Equidad es una apuesta innovadora de la Alcaldía Distrital de Santa Marta y pionera en el país; que busca resolver un problema de Inequidad e Ineficiencia Social en este Distrito mediante la coordinación, articulación e integración de actores, programas y organizaciones con oferta social; que permita aprovechar al máximo los recursos disponibles para lograr mayores impactos sobre la calidad de vida de la población samaria.

La Red Equidad articula e integra la oferta institucional de entidades públicas, privadas, del orden internacional, nacional, departamental y distrital sobre territorios definidos y poblaciones concretas, orientada a la atención integral de la población en situación de extrema pobreza, con mayor presencia de niños y niñas menores de 5 años y barrios con mayores tasas de violencia y homicidios en la ciudad. Esta propuesta está construida sobre la premisa de la restitución de los derechos y está orientada a la superación de la pobreza extrema en la ciudad.

Reconoce las múltiples causas y dimensiones de la pobreza, al implementar programas integrales, para combatirla.

De otra parte, el Distrito de Santa Marta se ha convertido sin duda alguna en un bien público nacional, no solo por su invaluable centro histórico, por sus siete incomparables bahías, por sus inigualables parques naturales, o por su esplendorosa biodiversidad; sino especialmente porque es un microcosmos de la vida nacional donde se han asentado pobladores de toda la nación.

Santa Marta es la ciudad más antigua de Colombia, actualmente alberga a una población multiétnica de 454.860 habitantes, de los cuales 433.740 viven en la cabecera municipal en un área urbana de 56 Km² y 21.120 habitantes están distribuidos en los 4 corregimientos que integran la zona rural. La ciudad es hoy un territorio en pleno proceso de construcción y consolidación; una ciudad intermedia que se debate entre distintas problemáticas urbanas, rurales y costeras, las cuales hacen cada vez más complejo su proceso de desarrollo.

Sin embargo, “La escasez de liderazgos, la inexistencia de voluntad política y las dinámicas excluyentes que caracterizan a los modelos de gestión política y económica locales, no contribuyen en nada a la necesidad de movilizar a una sociedad diversa hacia el diseño de una visión estratégica de desarrollo para la ciudad. Dicha visión, debe necesariamente considerar la creación de capacidades de autodesarrollo, la definición de los principales objetivos y proyectos comunes que demanda Santa Marta para su transformación y el establecimiento de un marco de movilización y cooperación de los actores sociales, productivos e institucionales de la ciudad. La carencia de una apuesta estratégica por un futuro mejor, está limitando las posibilidades de enfrentar exitosamente los desafíos que plantea el contexto global y los retos de convertir las ventajas comparativas en competitivas, elevar la calidad de vida y alcanzar un desarrollo humano sostenible”. (Plan de Desarrollo Alcaldía de Santa Marta, 2.012-2.015, p. 6)

PROCESO DE CONTROL SOCIAL SOBRE LA INVERSIÓN SOCIAL

El proceso de participación por parte de la comunidad es poco, se ve reflejado en las veedurías ciudadanas conformadas para los proyectos cuyo fin son el bienestar de la sociedad en general. En un informe generado por la Personería Distrital, vemos evidenciado la falta de compromiso de los finales beneficiarios de dichos proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la población samaria. No obstante, con el apoyo de la Contraloría Distrital justificamos que esta falta de compromiso se debe a la poca información brindada a las comunidades acerca de los derechos y deberes que tienen sobre los Programas, Planes y Proyectos desarrollados por la administración, y lo que pueden hacer para que estos sean llevados a cabo eficientemente.

De acuerdo con la Contraloría Distrital de Santa Marta, “Nuestro país tiene establecido un sistema de democracia participativa, que implica un reconocimiento constitucional y legal donde los fines del Estado se deben cumplir a través de la participación de todos los ciudadanos, de la toma de decisiones en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. A través de la Oficina de Control Fiscal, La Profesional Universitaria encargada de la Participación Ciudadana y las Auxiliares de Comunicación se fomenta el Control Fiscal Participativo, vinculando el Control Social al Control Fiscal que realiza la Contraloría”.

Las estrategias de participación buscan que los ciudadanos ejerzan el Control Social a través de la información y formación recibidas de los entes de control territoriales, de la formulación de Quejas y Denuncias Ciudadanas y del desarrollo de Veedurías integradas al Control Fiscal, para lo cual han sido preparados previamente.

Investigando sobre el control por parte de la ciudadanía en el Distrito, obtuvimos datos de algunas de las veedurías conformadas y registradas ante la Personería

Distrital que están ejerciendo sus deberes como ciudadanos para obtener un excelente beneficio:

Nombre	Objeto	Responsable
<u>Comité de Veeduría Ciudadana al proyecto de mejoramiento de abastecimiento de agua potable, Zona Nororiental.</u>	Vigilancia al proyecto de mejoramiento de agua potable zona nororiental	Oscar Ordóñez
<u>Veeduría Ciudadana y Control de Transporte Público Colectivo de Pasajeros Urbanos.</u>	Vigilancia al Control de Transporte Público Colectivo de Pasajeros Urbanos de esta ciudad.	Julio Cesar Candia Escobar
<u>Comité de Veeduría Ciudadana a la Construcción del Mejoramiento del acueducto de San Fernando en la ciudad de Santa Marta</u>	Vigilancia al proyecto de mejoramiento de acueducto en San Fernando, Santa Marta	Tomás Beleño
<u>Veeduría ciudadana de Control Fiscal Participativo y Social.</u>	Vigilancia sobre el control del proyecto de recaudo por concepto de los Servicios de Energía prestados por la empresa Electricaribe S.A.S.P	José Gutiérrez Pérez
<u>Veeduría Ciudadana a la Licencia Ambiental</u>	Vigilancia a la licencia ambiental mediante Resolución No. 1581 expedida por Corpamag	Edinson Troncoso
<u>Veeduría Ciudadana a la obra de drenaje - Mejoramiento del Sistema de adecuación de aguas lluvias en el barrio María Eugenia, Santa Marta.</u>	Vigilancia al sistema de adecuación de aguas lluvias en el barrio María Eugenia, Santa Marta.	Luis Escorcia Amador
<u>Veeduría Ciudadana a las contrataciones estatales en el Departamento del Magdalena.</u>	Vigilancia a las celebraciones de contrato en el Departamento del Magdalena	José Matute Schtborgh
<u>Veeduría Ciudadana acueducto Don Diego Aguacoche y Guachaca</u>	Vigilancia al proyecto del acueducto don Diego en Guachaca	Rodolfo Pájaro Piñeres
<u>Veeduría Ciudadana de Obras, Espacio Público, y Ambiente de los Barrios: Faroles, Boulevard de las Rosas, Villa Bella, y Villa del Carmen de la Ciudad de Santa Marta.</u>	Vigilancia al Proyecto de Obras, Espacio Público, y Ambiente de los Barrios: Faroles, Boulevard de las Rosas, Villa Bella, y Villa del Carmen de esta Ciudad.	Orlando Duran Castillo.
<u>Veeduría Ciudadana de los programas del ICBF, Comunidad 20 de octubre de</u>	Vigilancia a los programas del ICBF, en el barrio 20 de octubre en	Yimis Antonio Betancourt

<u>Santa Marta.</u>	Santa Marta.	
<u>Veeduría Ciudadana de pacientes con insuficiencia renal crónica.</u>	Vigilancia a las Entidades y programas que se tienen con los pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica	Rafael García
<u>Veeduría Ciudadana de Vías Veredales en el sector La Lisa, El boquerón, en el Centro, el Poblado, Transjordania, Donama, Los Limones, San Isidro y Páramo de San Isidro.</u>	Vigilancia a las vías Veredales en el sector La Lisa, El Boquerón, el Centro y San Isidro.	Oscar Morelos
<u>Veeduría ciudadana de Vigilancia y seguimiento, a los Recursos del Sistema General de Participación Sector Salud, del Departamento del Magdalena.</u>	Vigilancia al Proyecto de los recursos del Sistema General de Participación Sector Salud de este Departamento.	Miladis Aljadis Yáñez Lanchez
<u>Veeduría Ciudadana del Centro de Salud de Taganga.</u>	Vigilancia a los Recursos y servicios del centro de salud de Taganga.	Enoris Camargo Cantillo
<u>Veeduría Ciudadana del Control Fiscal Participativo social.</u>	Vigilancia Sobre el control Sala de Informática primaria de la Institución Educativa Distrital Técnica Guachaca.	Evilio Díaz Sacristán
<u>Veeduría Ciudadana del manejo de los recursos del programa compartel de conectividad en banda ancha de la Institución Educativa de Guachaca sede Orinoco</u>	Vigilancia al proyecto de los manejos de los recursos del programa compartel.	Mirledis Reigosa Montero.
<u>Veeduría Ciudadana del Medio Ambiente y Salubridad de Santa Marta.</u>	Vigilancia a lo relacionado con el medio ambiente y la salubridad en Santa Marta	Rafael Cortez
<u>Veeduría Ciudadana del Proyecto para Viviendas Nuevas en zona Rural, Linderos Buritaca.</u>	Vigilancia al proyecto de viviendas nuevas en zona rural, linderos Buritaca.	Oswaldo José Perea Daza
<u>Veeduría Ciudadana Organización Cruz Verde Ambiental.</u>	Vigilancia al Medio Ambiente de esta Ciudad.	Julio David Villamizar Vivas
<u>Veeduría Ciudadana Para el Control y Vigilancia de la Gestión de Planes, Programas, Proyectos, Normas Respectivas y Recursos Relacionados Con La Protección de los Animales de la ciudad de Santa Marta.</u>	Vigilancia al Proyecto de Protección de Los Animales de esta Ciudad.	Marina Esther Amaya Labastida.

IMPACTO CAUSADO POR CONTROL SOCIAL ANTE LA INVERSIÓN SOCIAL

La participación ciudadana en los procesos de desarrollo en el Distrito de Santa Marta es cada vez más eficiente. La comunidad ve la necesidad de hacer frente a los proyectos de inversión realizados por el Distrito para el fortalecimiento y creación de una vida digna en todos los sectores de la ciudad.

Además, la inclusión de cada persona en las veedurías ciudadanas demuestra el compromiso que tienen frente a los retos propuestos por el gobierno en la creación de una Equidad para Todos. Sin embargo, la falta de conocimiento de temas como los mecanismos de participación, hace que los procesos, toma de decisiones, creación y manejo de recursos públicos, no se ciñan a lo estipulado por la ley, aportando esto a malos manejos y a la entrega de bienes y/o servicios carentes de las condiciones optimas para suplir las necesidades básicas.

Así, aun teniendo la posibilidad de tener bienes y/o servicios en calidades optimas para una vida digna, la comunidad no se ve en la obligación de realizar seguimientos a los proyectos que buscan esa dignificación, pues no asumen el empoderamiento que tienen al ser recursos propios.

De esta manera, asumimos que esta falta de compromiso no se debe a la persona misma, sino a la falta de capacitación y comunicación de los mecanismos que pueden ejercer para la obtención de un producto final optimo.

CONCLUSION

En el Distrito de Santa Marta, al igual que en el resto del país, se desarrollan los Planes, Programas y Proyectos necesarios para la vida digna de los ciudadanos. Esto sumado a la participación de los ciudadanos en la verificación de una buena labor, encamina a dichos proyectos en arrojar resultados eficaces.

Según la Declaración Universal de Derechos Civiles, reconoce que “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

De acuerdo a esto, se reconoce la necesidad de velar por los procesos de la Inversión en el Distrito, que aunque no garantiza que los detractores como la Corrupción, Parapolítica, entre otros, se involucren en la realización de estos, si deja en claro que la participación de la comunidad centra un precedente en el buen manejo de los recursos públicos.

Así, el derecho a la participación ha evolucionado, superando el ámbito de la participación en la vida política a través del voto, y extendiéndose al ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales y de solidaridad. De esta manera la participación se constituye en un derecho fundamental que articula los demás derechos humanos.

BIBLIOGRAFIA

- CHIAVENATO, Idalberto. El control administrativo: Concepto, Definición, Principios y Aplicaciones. En: Revista Panorama Industrial. Octubre, 2.011. p. 2.
- FAYOL, Henry. La incapacidad industrial del Estado: el P. T. T, París, Dunod. 1.921.
- Escuela Superior de Administración Pública. Participación en el control social a la gestión pública. 1 ed. Bogotá D.C: 2006. 77 p.
- MASSÉ, Pierre. La elección de las inversiones. 1 ed. Barcelona, España: Sagitario. 1.963. 536 p.